



Rama Judicial del Poder Publico
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

D.E.I.P De Barranquilla, treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicado	08-001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Yajaira del Carmen Palacio escobar
Demandado	Nación- Ministerio de Educación- Fomag- Departamento del Atlántico.
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

I. ASUNTO A DECIDIR

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por la señora Yajaira del Carmen Palacio Escobar contra Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y Departamento del Atlántico, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

II. ANTECEDENTES

DEMANDA

2.1. PRETENSIONES

Como pretensiones de demanda, la actora presentó las que a continuación se mencionan las cuales fueron divididas por el accionante de declaraciones y condenas¹:

2.1.1 Declaraciones

Primera: Declarar la existencia de un acto ficto configurado, producto de la reclamación administrativa de la sanción moratoria presentada el día 30 de agosto de 2017, por el pago tardío de las cesantías a mi representada.

Segunda: Declarar la nulidad del acto ficto configurado frente a la petición presentada el día 30 de agosto de 2017, en cuanto negó el derecho a pagar la Sanción Por Mora a mi mandante establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma

Tercera: Declarar que mi representado tiene derecho a que la NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-(vinculado el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO por tener interés en las resultados del proceso), le reconozca y pague la SANCION POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo,

¹ Archivo N° 01 Expediente Digital (Demanda Páginas 02, 03)

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

2.1.2 Condenas

Primera: Condenar a la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (vinculado el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO por tener interés en las resultas del proceso), a que se le reconozca y pague la SANCION POR MORA establecida en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006 a mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

Segunda: Que se ordene a la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, (vinculado el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO — SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO por tener interés en las resultas del proceso), dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (C.P.A.C.A).

Tercera: Condenar a la NACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, (vinculado el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO por tener interés en las resultas del proceso) al reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la SANCIÓN MORATORIA referida en el numeral anterior, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha en que se efectuó el pago de la cesantía, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al presente proceso.

Cuarta: Condenar a la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, (vinculado el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO por tener interés en las resultas del proceso) al reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se efectúe el pago de la SANCIÓN MORATORIA reconocida en esta sentencia.

Quinta: Condenar en costas a la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, (vinculado el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO por tener interés en las resultas del proceso) de conformidad con lo estipulado en el Artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se rige por lo dispuesto en el Artículo 392 del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010.

2.2. HECHOS

Al realizar el estudio del cuerpo de la demanda y sus anexos, como fundamentos fácticos de las pretensiones de demanda, se resumen los siguientes²:

Primero: El artículo 3 de la ley 91 de 1989, creó el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica.

Segundo: De conformidad con el párrafo 20 del artículo 15 de la ley 91 de 1989, le asignó como competencia al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO el pago de la CESANTIA de los docentes de los establecimientos educativos del sector oficial.

Tercero: Teniendo de presente estas circunstancias, mi representada Yajaira Del Carmen Palacio Escobar, por laborar como docente en los servicios educativos estatales le solicitó a la Nación, Ministerio De Educación Nacional, Fondo De Prestaciones Sociales El Magisterio (vinculado el Departamento Del Atlántico, Secretaria De Educación Departamental Del Atlántico por tener interés en las results del proceso), el día 20 de septiembre de 2014 el reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho.

Cuarto: Por medio de la Resolución N° 1081 del 28 de noviembre de 2014 le fue reconocida la cesantía solicitada.

Quinta: Esta cesantía fue cancelada el día 25 de febrero de 2015, por intermedio de entidad bancaria.

Sexto: El artículo 4 de la ley 1071 de 2006, estableció:

" Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo."

El artículo 5 ibídem por su parte contempló:

" Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del

² Archivo N° 01 Expediente Digital (Demanda página 06)

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido por el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. (Subrayas fuera de texto)

Séptimo: El Honorable Consejo de Estado, en multiplicidad de oportunidades se ha pronunciado al respecto de la manera como debe entenderse la disposición normativa, como en sentencia de Unificación del 27 de marzo de 2007, SU 02513, M.P. Jesús 'María Lemos Bustamante, donde contemplo que:

" **Sobre la fórmula de contabilizar los términos señalados en la norma anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado:** () El tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponde a la ejecutoria ... más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria"

Octavo: Al observarse con detenimiento, mi representado solicitó la cesantía el día 20 de septiembre de 2014, siendo el plazo para cancelarlas el día 05 de enero de 2015, pero se realizó el día 25 de febrero de 2015, por lo que transcurrieron 51 días de mora contados a partir de los 70 días hábiles que tenía la entidad para cancelar la cesantía hasta el momento en que se efectuó el pago.

Noveno: Con fecha 30 de agosto de 2017 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en el pago de la cesantía a la entidad convocada y ésta resolvió negativamente de manera ficta las pretensiones invocadas, situación que conllevó de conformidad con el procedimiento administrativo a solicitarle a la Procuraduría la fijación de audiencia de conciliación prejudicial con el objeto de llegar a acuerdos y sobre las pretensiones de esta demanda, situación que no fue posible, y por ello se adelanta el presente medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

2.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO, NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION.

Como fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de su violación, presentó la parte actora los argumentos que a continuación se resumen:

Disposiciones Violadas

- Ley 91 de 1989. Art. 5, 9 y 15.
- Ley 244 de 1995. Artículos 1 y 2.
- Ley 1071 de 2006. Artículos 4 y 5
- Decreto 2831 de 2005.

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

El pago de la cesantía de los docentes afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, es una situación jurídica susceptible de ser reconocida en sede judicial, por cuanto las entidades obligadas a responder por dicha prestación han estado menoscabando las disposiciones que regulan la materia, incurriendo en mora injustificada para el pago de la misma, contrario al pago de las cesantías de los demás servidores del estado, que al momento de solicitarlas, están siendo canceladas a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su solicitud, por tratarse de emolumentos salariales que retiene el patrono, pero que son del empleado, para cuando éste, quede CESANTE en su actividad.

En virtud de estas circunstancias, fueron expedidas de manera progresiva la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, mediante las cuales, se reguló la situación particular del pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, estableciendo un término perentorio para el reconocimiento de las mismas, conformado por los 15 días contados a partir de la radicación de la solicitud y los siguientes 45 días para proceder al pago al servidor, una vez expedido el acto administrativo de reconocimiento.

Sin embargo, y muy a pesar de que la jurisprudencia ha establecido que la disposición normativa debe ser interpretada en el sentido que entre el reconocimiento y pago de la prestación en comento, no debe superarse los setenta (70) días hábiles después de haber sido radicada la solicitud, la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO ha venido cancelando por fuera de los términos establecidos en la Ley la prestación reclamada, circunstancia que genera una SANCIÓN a cargo de esta entidad equivalente a un (1) día de salario del docente por cada día de retardo que se contabiliza a partir del día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles cursados desde el momento en que se radicó la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma. (...)

En estas circunstancias, obsérvese que el espíritu garantista de la Ley 1071 de 2006, al establecer los términos perentorios para el reconocimiento y pago de la cesantía de mi representado, está siendo burlada por la entidad demandada, pues se encuentra cancelando la prestación, con posterioridad a los setenta (70) días después de haber realizado la petición de las mismas, obviando la protección de los Derechos del trabajador, haciéndose LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO asumir o ser el acreedor a la SANCION correspondiente por la mora en el pago de la CESANTIA por el incumplimiento o retardo en el pago de la misma y con ésta circunstancia pueda resarcirse los daños que causó a mi mandante, situación que debe ser oportunamente protegida por este despacho.

Es así como la ley 244 de 1995 y la ley 1071 de 2006 al establecer un término perentorio para la liquidación de la cesantía buscó fijar un imperativo para que la administración expidiera la resolución en forma oportuna, evitando que la autoridad demorara su respuesta, pretendiendo evadir la acción de la justicia.

Conforme a lo anterior se puede vislumbrar que fue el mismo Estado, quien habiendo visto la burla que las entidades públicas encargadas del reconocimiento de la cesantía daban a sus empleados, pretendió remediar dicha situación con la expedición de la multicitada norma; pese a ello las entidades han evadido el mandato legal, incurriendo en mora injustificada y creando incertidumbre en el servidor frente al reconocimiento de la prestación, expidiendo el acto administrativo sólo cuando pudiera eventualmente,

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

disponer de los recursos para la cancelación de la misma, pretendiendo evitar la imposición de la sanción por mora; sin embargo al encontrar el H. Consejo de Estado en esto, una situación tan irregular, procedió a explicar en multiplicidad de pronunciamientos, la formula como deben computarse los términos señalados para el pago de la prestación reclamada y empezar a causarse la sanción por mora que se solicita en esta oportunidad, lo que le significa señor juez, que debe accederse a las suplicas de la demanda.

2.4 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.4.1. Departamento Del Atlántico, Secretaria De Educación.³

De acuerdo al plan metodológico planteado para esta respuesta al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho propuesto por YAJAIRA PALACIO ESCOBAR, quiero manifestar, que me opongo enfáticamente a las pretensiones y condenas que pretende la demandante en contra del Departamento del Atlántico, en virtud a que por parte del ente territorial que represento no se ha amenazado ni vulnerado derechos particulares, legales ni constitucionales, por lo tanto, no compartimos los argumentos planteados en la demanda por las siguientes razones: Las prestaciones de los docentes oficiales, así como el trámite para su reconocimiento a cargo de las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales certificadas, está regulado por las leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y el decreto 2831 de 2005, donde se establecen las competencias de cada una de las entidades que intervienen en el citado trámite, como se expondrá a continuación: Al efecto, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, establece:

“ARTICULO 56. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN MATERIA DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidos por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial”.

(...) En este contexto, el pago de las cesantías parciales de YAJAIRA PALACIO ESCOBAR reconocido mediante Resolución N° 1081 del 28 de noviembre de 2014, se realizaron dentro de los turnos de disponibilidad presupuestal y el cronograma establecidos con los bancos y en virtud de lo dispuesto en el art.14 de la Ley 344 de 1995 y acuerdo 034 de 1998 emanado del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA.

La Secretaria de Educación Departamental de la Gobernación del Atlántico y el ente territorial DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, carece de legitimación en la causa y por tanto de interés sustancial en las results del proceso, por cuanto no puede entrar a satisfacer una eventual y poco probable condena en el presente caso.

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN RECLAMADA: Respecto a la indemnización moratoria solicitada es necesario señalar que el artículo 5 de la Ley 1071

³ Archivo N° 09 Expediente digital (Contestación de la Demanda Departamento del Atlántico)

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
 Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
 Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

de 2006, no es aplicable al régimen prestacional especial de los docentes, pues así lo ha determinado la jurisprudencia, en el sentido de que la Ley 91 de 1989 a norma que se aplica de manera prevalente a la Ley 1071 de 2006, así esta última norma sea posterior, por cuanto la ley especial regula una materia concreta respecto al pago de las cesantías para los docentes, y en cuanto a la sanción por mora en el pago oportuno de las cesantías, y que por ello la disposición legal de carácter general regulada por la Ley 1071 de 2006, no se hace extensiva para los docentes del sector público, al encontrar evidente que la Ley 91 de 1989 regula de manera especial el pago de las cesantías para los docentes y que dentro de su normatividad no se contempla e s t a sanción.

2.4.2 Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

(...)

Descendiendo al caso que nos ocupa, y si la posición del despacho es la de acoger la sentencia antes mencionada, es claro indicar que la Ley 1071 de 2006, en su artículo 50 , expresa, “que La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público...”. En este caso, el fondo es el que tiene la función del pago de prestaciones, sin embargo, la expedición del acto corresponde a las secretarías de educación y por otro lado se encarga a una sociedad fiduciaria de la administración de los recursos del fondo, y pagar las prestaciones sociales. Frente al caso que nos convoca, se evidencia que el ente territorial emite la resolución de reconocimiento de las cesantías por fuera del término de 15 días establecido normativa y jurisprudencialmente, ya que dicho término fenecía el 14 DE ENERO DE 2015. Razón por la cual, el ente territorial es responsable por el retardo y no la entidad pagadora, argumento que se soporta en el artículo 57 de la ley 1955 de 2019, que establece en su parágrafo lo siguiente:

“La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías”

Con lo cual, será la entidad Fiduciaria quien deberá proceder con los pagos prestaciones, luego de contar con el acto administrativo emitido por la respectiva secretaria, previo el trámite legal para su concesión que compromete el reporte de todos los entes implicados dentro del salario del docente conforme a derecho y a la mayor brevedad posible según la disponibilidad de los recursos provenientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por tanto, frente al reconocimiento de la cesantía el consejo de estado establece que “el establecimiento de un término para el reconocimiento de la cesantía y de otro para que se efectúe su pago efectivo, busca proteger al trabajador garantizando el cometido de tal prestación, y que justamente con ella, se pueda solventar la eventualidad para la cual la solicitó -parciales- o por la que se causó –definitivas

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

ESTADO DE LA SANCIÓN MORATORIA EN EL PRESENTE PROCESO Cabe resaltar, que acorde con el aplicativo FOMAG, el cual es utilizado por la Unidad de Defensa Judicial con el fin de consultar el estado de las cesantías solicitadas por el docente y el estado de la sanción moratoria generada como consecuencia del incumplimiento en el pago de dichas cesantías, es posible evidenciar que el pago de dicha sanción ya fue pagada, por tanto, no hay lugar a un nuevo reconocimiento.

DE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA SANCIÓN POR MORA Y LA INDEXACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN.

Sobre este tópico, es menester memorar que el Consejo de Estado mediante sentencia de unificación con radicado No. 73001-23-33-000-2014-00580-01 en lo relativo a la indexación de la sanción por mora, señalo expresamente la incompatibilidad entre la indexación y la sanción por mora y para el efecto es preciso traer a colación lo que el máximo órgano de cierre en lo contencioso administrativo ha dado al fenómeno de indexación: “Esta figura, nace como una respuesta a un fenómeno económico derivado del proceso de depreciación de la moneda, cuya finalidad última es conservar en el tiempo su poder adquisitivo, de manera que, en aplicación de principios como el de equidad y de justicia, de reciprocidad contractual, el de integridad del pago y el de reparación integral del daño, el acreedor de cualquier obligación de ejecución diferida en el tiempo esté protegido contra sus efectos nocivos.”

2.5. ALEGATOS

2.5.1. Parte Actora Yajaira del Carmen Palacio Escobar⁴

Sostiene que de acuerdo con los documentos arrimados al proceso con la demanda, está plenamente demostrado:

- a) La calidad de docente al servicio del estado –Departamento del Atlántico- de la persona demandante.
- b) La fecha en que se formuló la petición de reconocimiento de la cesantía, esto es, 20 de septiembre del 2014.
- c) El acto mediante el cual se reconoció a la parte actora el pago de sus cesantías, esto es, Resolución N° 1081 del 28 de noviembre de 2014
- d) La fecha en que le canceló la prestación reconocida, el día 25 de febrero del 2015 y los días de retardo en el pago de las mismas, esto es 51 días, todo ello según documentación obrante en el expediente.

Con fundamento en tales presupuestos probatorios, resulta entonces posible, la aplicación en el caso concreto, de la Ley 244 de 2005 y la ley 1071 de 2006 que establece “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”.

⁴ Archivo N° 23 Expediente Digital (Alegatos de Conclusión Demandante)

2.5.2. Parte Demandada; Departamento del Atlántico⁵

Señoría del compendio de pruebas allegadas al proceso, claramente podemos colegir que, las pretensiones solicitadas por la demandante en su escrito de demanda, no tienen asidero jurídico alguno, lo anterior debido a que los Actos Administrativos demandados, se encuentran Legal y Constitucionalmente ajustados a derecho, lo anterior teniendo de presente que, a mi representada no le asiste ningún tipo de obligación para con el actor.

Ahora bien, en lo que respecta a la resolución emitida por la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, es menester reiterar que el mismo se encuentra Legal y Constitucionalmente ajustada a derecho, ya que no reviste formas de ilegalidad tales como: 1) falta de competencia; 2) desvío de poder; 3) vicios de forma; 4) violación de una norma superior, 5) falta de motivación. De donde deviene con toda claridad que este acto no se fundamentó en consideraciones falsas, inexistentes o impertinentes, de acuerdo con el régimen legal en que se basó la corporación para expedirlo; lo anterior teniendo de presente que a mi representada no le asiste ningún tipo de obligación para con el actor, lo anterior tiene como fundamento la Ley 91 de 1989, mediante la cual fue creado el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Ahora, de conformidad con el Decreto 2831 de 2005, son obligaciones de la Secretarías las de recibir y radicar las solicitudes en estricto orden, realizar el estudio, liquidar y proyectar el respectivo acto administrativo, remitir el expediente a la entidad fiduciaria para la aprobación del proyecto de resolución antes de la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la prestación y una vez el acto administrativo se encuentre en firme, remitirlo a la entidad fiduciaria para la respectiva inclusión en nómina y orden de pago.

Resulta entonces que el Decreto 2831 de 2005 expresamente establece que las prestaciones reconocidas a los docentes, las pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio: el cual por ser una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica (art.3 de la ley 91 de 1989), es administrado por la Fiduprevisora S.A., quien en últimas es la encargada de efectuar el pago correspondiente.

Así las cosas, es competencia de FIDUPREVISORA S.A., realizar los pagos de las prestaciones sociales y económicas de los docentes afiliados, mientras exista la partida presupuestal que así lo permita, previa recepción de los actos proferidos por el funcionario competente de la respectiva entidad territorial, en donde se reconozca el derecho y la cuantía a pagar, acto administrativo que debe estar debidamente notificado y ejecutoriado, en estricto orden de aprobación y recepción de los actos administrativos, razón por la cual, todo lo relacionado con las fechas de programación y el pago de la prestación reconocida, corresponde exclusivamente a la FIDUPREVISORA S.A., entidad responsable de elaborar las nóminas correspondientes, dentro de los turnos de disponibilidad presupuestal y el cronograma establecido con los bancos en virtud de lo dispuesto el acuerdo 034 de 1998 emanado del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 344 de 1996.

En este contexto, el pago de las cesantías parciales de YAJAIRA PALACIO ESCOBAR reconocido mediante Resolución N° 1081 del 28 de noviembre de 2014 se realizaron dentro de los turnos de disponibilidad presupuestal y el cronograma establecidos con los

⁵ Archivo N° 22 Expediente Digital (Alegatos de Conclusión Gobernación del Atlántico)

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

bancos y en virtud de lo dispuesto en el art.14 de la Ley 344 de 1995 y acuerdo 034 de 1998 emanado del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

(...) Ahora bien, La Secretaria de Educación Departamental de la Gobernación del Atlántico y el ente territorial DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, carece de legitimación en la causa y por tanto de interés sustancial en las resultas del proceso, por cuanto no puede entrar a satisfacer una eventual y poco probable condena en el presente caso.

2.5.3 Parte Demandada, Nación Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

La parte Demandada Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no presentó alegatos de conclusión dentro de la etapa procesal dispuesta para ello.

III. TRAMITE PROCESAL

- La demanda fue presentada el 18 de marzo de 2019⁶ y admitida en auto dictado por este Juzgado, en fecha 15 de mayo de 2019.⁷
- Surtidos los trámites de notificación, la demanda fue contestada por el Departamento del Atlántico, y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.⁸
- De las excepciones propuestas, se corrió traslado mediante fijación en lista del 02 de octubre de 2020.⁹
- Con base a lo señalado en el artículo 13 del Decreto 806 de 2020, el Despacho dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión, teniendo en cuenta que no habían pruebas que practicar y que el asunto a tratar es de puro derecho, por medio de auto del 12 de noviembre de 2020.¹⁰
- Finalmente, y vencido el referido traslado para alegar, ingresa el proceso a Despacho en estado de dictar sentencia.

IV. CONSIDERACIONES.

4.1. Validez de la actuación.

Revisadas las actuaciones procesales, no observa este Juzgado irregularidades procedimentales que conlleven a declarar la nulidad total o parcial de lo actuado.

⁶ Archivo N° 05 Expediente Digital (Acta de Reparto)

⁷ Archivo N° 06 Expediente Digital (Auto Admisorio)

⁸ Archivo N° 09, 14 Expediente Digital (Contestación Demanda)

⁹ Archivo N° 21 Expediente Digital (Traslado de Excepciones Fijación en lista)

¹⁰ Archivo N° 24 Expediente Digital (Auto Corre traslado para alegar)

4.2. Problema jurídico:

El problema jurídico en el presente asunto, se circunscribe en establecer si a la parte actora le corresponde el reconocimiento y pago de 51 días de sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías, en virtud de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, que regula los términos correspondientes al pago oportuno de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, como quiera que al ser docente oficial está regida por el la Ley 91 de 1989.

Para lo que se estudiará la legalidad del acto ficto configurado por el silencio administrativo a la petición realizada el 30 de agosto de 2017, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por presuntamente ser expedido con infracción a la norma en que debía fundarse. En caso positivo, determinar si se configuró la prescripción de los derechos reclamados.

4.3. Tesis del Juzgado:

En el presente asunto el Despacho sostendrá la tesis, conforme a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado en sentencia de unificación CESUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, la cual determinó que si bien el personal docente puede tener derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías en aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, lo cierto es que la misma Corporación ha sido clara en señalar a lo largo de su jurisprudencia que dicha sanción moratoria fue consagrada únicamente para el régimen de liquidación anualizado y no para el régimen de cesantía retroactiva, de conformidad con la misma Ley 244 de 1995.

Por tanto, y como quiera que la señora Yajaira del Carmen Palacio Escobar es beneficiaria del régimen de cesantías retroactivas, es claro que no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

4.4. Marco jurídico y jurisprudencial

4.4.1. Régimen de Cesantías de los docentes

A fin de establecer el régimen de cesantías de los educadores de acuerdo a su tipo de vinculación es necesario remitirnos nuevamente a la Ley 91 de 1989, estatuto que en su artículo 15 reguló el tema de las cesantías y de las demás prestaciones sociales de los docentes de la siguiente manera:

"Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

- 1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.*
- 2. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas*

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. (...)

3 Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1°. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que, de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional."

Se observa que la norma transcrita contempla una transición en cuanto al régimen a aplicar en las prestaciones sociales de los docentes; así, conforme al numeral primero, los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial y los docentes nacionales y los vinculados a partir del 1° de enero de 1990, se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

Específicamente sobre la prestación social de las cesantías, el numeral tercero de la norma en cita contempla las mismas fechas como punto de partida de la transición, pues allí se estipula que los vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 conservan el régimen retroactivo de cesantías, mientras que los que se vinculen al servicio educativo a partir de enero de 1990 se les aplica el sistema anualizado de cesantías sin retroactividad.

Respecto a los regímenes de cesantía docente el Consejo de Estado se manifestó de la siguiente manera:

"De manera particular, en lo que a las cesantías hace referencia, el numeral 30 de este mismo artículo señala, que, a partir de su vigencia, para docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, dicho Fondo pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario, sobre el salario promedio del último año. Y para los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir del 10 de enero de 1990, el Fondo reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

Se deduce entonces, que la Ley 91 de 1989 estableció un régimen que reguló la situación de los docentes, en atención al proceso de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975 y que implicaba la existencia tanto de docentes vinculados por la Nación como de docentes que, habiendo sido vinculados por una entidad territorial, serían nacionalizados.

Los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial y los docentes nacionales y los vinculados a partir del 10 de enero de 1990, se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

En lo que atañe a las cesantías de los docentes nacionalizados, se conservó el sistema de retroactividad para los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, de conformidad con la normativa vigente en la entidad territorial, y a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 10 de enero de 1990, se les aplicaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses".¹¹(Negrillas y subrayas fuera del texto original)

De lo hasta ahora expuesto tenemos que, únicamente los docentes nacionalizados que comenzaron a laborar antes de 31 de diciembre de 1989, conservaron el régimen retroactivo de cesantías, toda vez que los nacionales y los incorporados al servicio educativo a partir de enero de 1990 independientemente de su tipo de vinculación, se les aplica el sistema anualizado de cesantías sin retroactividad.

4.4.2. Sanción moratoria en el pago extemporáneo de las cesantías a los docentes.

El procedimiento para el reconocimiento y pago de las cesantías, así como la sanción por la mora en el pago extemporáneo, se contempló para los empleados públicos en la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006.¹²

Ante la disparidad de criterios en relación con la aplicación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 en lo atinente a los educadores oficiales, la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela profirió la sentencia de unificación SU-336 de 2017¹³, en la que concluyó que a los docentes sí le son aplicables las normas de sanción por mora en el pago de cesantías.

¹¹ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "A", Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil diez (2010), Radicación número: 63001-23-31-000-2003-01125-01(0620-09).

¹² "Artículo 2°. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este."

¹³ C. Const., Sent. SU-336, may.18/2017 M.P. Iván Humberto Escrucera Mayolo.

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

Por su parte el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018¹⁴, en la que estableció que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, contemplada en la Ley 244 de 1995, cobijaba a los docentes.

Respecto al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, el Consejo de Estado señaló que este era aplicable únicamente a los empleados que se encontraran regidos por el régimen anualizados de cesantías, así lo sostuvo en un caso de empleados territoriales.¹⁵

"Para la Sala resulta claro entonces que la demandante es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, en los términos de la Ley 6° de 1945 y demás normas complementarias. En consecuencia, cualquier análisis en torno a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 así como la prescripción de la misma es impertinente, por cuanto no se puede derivar el incumplimiento de la entidad sin la manifestación expresa de la accionante de acogerse al nuevo régimen. (...)"

Así las cosas, es claro que la sanción moratoria dispuesta en la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006¹⁶, no se consagró por el legislador para aquellos empedados beneficiarios del régimen de cesantías retroactivo, pues la norma especial que atañe a los docentes, esto es, la Ley 91 de 1989 no lo estableció, ni tampoco las norma generales de los empleados públicos en las cuales se consagró este régimen retroactivo, como son las Leyes 6.1v de 1945 y 65 de 1946 y, el Decreto 1160 de 1947.

Además, es evidente que el régimen retroactivo de cesantías, presupone un reconocimiento más favorable que el anualizado, prerrogativa que hace improcedente la pretensión del benefició de la norma posterior en aplicación del principio de inescindibilidad normativa, ampliamente expuesto por el Consejo de Estado.

Así lo señaló, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al realizar el estudio puntual de la aplicación de la sanción moratoria a un docente beneficiario del régimen retroactivo de cesantías¹⁷ :

"Por tratarse de un docente nacionalizado, vinculado antes del 31 de diciembre de 1989 (el actor presta sus servicios docentes desde el 10 de mayo de 1983), el señor (...) goza de un régimen de liquidación retroactiva de sus cesantías, acorde con lo previsto en el numeral 3 literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Como quedó visto en el marco jurídico expuesto, la normatividad especial que rige tal prestación para este tipo de docentes (nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1989) no previó el reconocimiento de sanción moratoria alguna por el retardo en el pago de las cesantías; como tampoco lo hicieron las normas generales que regulan el régimen de liquidación retroactiva (Ley 6a de 1945, Ley 65 de 1946 y Decreto 1160 de 1947).

¹⁴ C.E. Sec. Segunda, Sent. 2014-580 jul. 18/2018 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

¹⁵ C.E., Secc. Segunda, sent. 08001233100020110124101- 4269-20 I 3. May. 26/2016 M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

¹⁶ "Artículo 2°. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este."

¹⁷

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

Y ello encuentra su razón de ser en que el régimen de liquidación retroactiva de las cesantías, indudablemente, es mucho más favorable para el servidor público que el anualizado, desde el punto de vista de la cuantía de la prestación; razón por la que de alguna manera se justifica que el Legislador no haya previsto el reconocimiento de sanción moratoria alguna."

4.5. Caso Concreto.

4.5.1 Hechos probados

1- La señora Yajaira del Carmen Palacio Escobar, presentó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales bajo número radicado 2014-CES-35323 de fecha 20 de septiembre de 2014, con destinación a la reparación de vivienda, tal como consta en la parte considerativa de la resolución N° 1081 del 28 de noviembre de 2014¹⁸.

2- Mediante resolución N° 1081 del 28 de noviembre de 2014¹⁹, expedida por la Secretaria de Educación Departamental del Atlántico, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, resolviendo el reconocimiento y pago de la suma de \$87.088.835, menos los descuentos correspondientes por valores ya reconocidos y pagados por concepto de liquidación parcial de cesantías.

3- En fecha 30 de agosto de 2017, fue solicitado el pago de la sanción moratoria ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,²⁰ el cual no fue resuelto por la entidad solicitada configurando de esta manera el acto ficto con silencio administrativo negativo.

4- Se encuentra reconocida la relación laboral existente entre las partes, mediante certificación expedida por la Secretaria de Educación Departamental de la Gobernación del Atlántico, nombramiento realizado mediante Decreto 005 del 14 de febrero de 1986 Emanado de la Alcaldía Municipal de Manatí, y posesionada en fecha 17 de febrero de 1986 como docente del Departamento del Atlántico.²¹

5- El salario devengado por la docente fue acreditado mediante comprobante de pago expedido por la Secretaria de educación Departamental del Atlántico²².

4.5.2 Análisis crítico de las pruebas frente al marco jurídico planteado

Está demostrado dentro del proceso que la demandante se vinculó como docente a partir del 17 de febrero de 1986, por lo que fue clasificada como nacionalizada, teniendo en cuenta que su vinculación es anterior al 31 de diciembre de 1989, por lo tanto, el régimen de cesantías que la rige es el sistema de retroactividad, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 91 de 1989.

Ahora bien, la liquidación de las cesantías definitivas efectuada por la entidad demandada mediante la resolución N° 1081 del 28 de noviembre de 2014, atendió al régimen retroactivo de la actora, pues tomó como salario base la liquidación del monto de

¹⁸ Archivo N° 03 Expediente Digital (página 01, Resolución 1081)

¹⁹ Por la cual se reconoce con destino al fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el pago de una prestación económica cesantía parcial para la reparación de vivienda, a una docente municipal sistema general de participación retroactiva

²⁰ Archivo N° 03 Expediente Digital (páginas 5, 6, y 8 Reclamación administrativa)

²¹ Archivo N° 12 Expediente Digital (página 10)

²² Archivo N° 03 Expediente Digital (página 08)

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

\$2.711.939, correspondiente a su último salario y, sobre este liquidó los 10.278 días de prestación de servicios.

En ese orden de ideas tenemos que, únicamente los docentes nacionalizados que comenzaron a laborar antes de 31 de diciembre de 1989, conservaron el régimen retroactivo de cesantías, toda vez que los nacionales y los incorporados al servicio educativo a partir de enero de 1990 independientemente de su tipo de vinculación, se les aplica el sistema anualizado de cesantías sin retroactividad.

Conforme a lo estudiado, se concluye que no le asiste derecho a la demandante al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contenida la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006, por ser beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, dado que la norma especial que regula a los docentes, esto es, la Ley 91 de 1989 no lo estableció, como tampoco lo hicieron las normas generales de los empleados públicos que consagraron el régimen retroactivo de cesantías, como son las Leyes 6 de 1945 y 65 de 1946 y, el Decreto 1160 de 1947.

V. CONDENA EN COSTAS

Finalmente, el Juzgado no condenará en costas, en razón de que la parte vencida no asumió en el proceso una conducta que la hiciera merecedora a ello, tal como el haber incurrido en temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, en dilación sistemática del trámite o en deslealtad.

En mérito de lo expuesto, **el Juzgado Sexto (06) Administrativo Oral de Barranquilla**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR, conforme a la parte motiva de esta sentencia, todas las pretensiones de la demanda de la referencia.

SEGUNDO: Sin en costas en esta instancia.

TERCERO: NOTIFICAR personalmente esta providencia a la señora Procuradora, agente del Ministerio Público ante este Juzgado.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ
Juez

L.P.V

Firmado Por:

Lilia Yaneth Alvarez Quiroz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Contencioso 006 Administrativa
Barranquilla - Atlantico

Radicado No. 08001-3333-006-2019-00060-00
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante: Yajaira del Carmen Palacio Escobar
Demandado: Nación, Min Educación, Fomag, Departamento del Atlántico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **35267074132254cf1dca59c51c0e68e4137ba53ce7e5cb9e1fa30da9189197e5**
Documento generado en 30/09/2021 06:08:20 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>